

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Tabasco por el C. Nabor Hernandez, contra la prision á que fué reducido de orden del Gefe político de San Juan Bautista.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Nabor Hernandez, ha tenido razon para quejarse y considerar violada en su persona la garantía que otorga el artículo 16 de la Constitucion de la República, con habérsele reducido á prision de orden verbal del C. Gefe político, sin el mandamiento escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento, y que por lo mismo, es de concedérsele el amparo que solicita.

San Juan Bautista, Marzo 9 de 1874.—*Lia. Cordera.*

Es copia que certifico. San Juan Bautista, 12 de Marzo de 1874.—*Gabriel Sosa, secretario.*

*Sentencia del C. Juez de Distrito.*

San Juan Bautista, Marzo 12 de 1874.

—Visto este expediente instruido por amparo intentado por el C. Nabor Hernandez contra el C. Gefe político de esta, por haberle reducido á prision injustificadamente, con violacion de los artículos constitucionales que cita; teniendo presente el informe de la autoridad; el pedimento fiscal y todo lo demas que consta de autos, se considera.

Primero: que el funcionario causante establece en su informe el hecho reclamado, en el propio ser que le atribuye el quejoso, manifestando que lo redujo á prision en castigo, por los términos irrespetuosos de que usó en el distinto ocuro de amparo que entabló por despojo de una máquina de costu

TOMO VI.—PARTE II.

ra de D<sup>a</sup> Manuela Vera, sin justificacion alguna de haber cubierto este procedimiento ya de suyo irregular, con los requisitos prescritos por la ley fundamental.

Segundo: que si bien es cierto que el artículo 20 de la ley para el gobierno interior del Estado de 13 de Noviembre de 1852 autoriza á los Gefes políticos para imponer cincuenta pesos de multa, ocho dias de obras públicas ó doble tiempo de arresto á los que los desobedescan ó falten al respeto, la autoridad de que se trata usó erroneamente de esta facultad en el caso en cuestion, constituyéndose Juez en su propia causa, apropiándose jurisdiccion penal en un negocio en que representaba el carácter pasivo de parte del reo, sometido ya al conocimiento de otro Tribunal á quien debió pedir el castigo de Hernandez, si se consideraba personalmente injuriado por sus expresiones. Es pues consiguiente que aquel C. Gefe político no aplicó exactamente la ley á la supuesta falta de Hernandez, y que bajo este punto de vista, violó el último concepto del artículo 14 de la Constitucion Nacional.

Tercero: que el mismo concepto se corrobora bajo la consideracion de que no consta que dicho Gefe político haya dejado á Hernandez la opcion entre la pena de arresto y la pecuniaria, como lo previene á su final el mismo artículo 20 citado, por estas palabras: y quedando á los culpables la eleccion entre la pena corporal ó la pecuniaria que proporcionalmente les corresponde.

Cuarto: dado que en el hecho traído á juicio se hubiera procedido en uso de una potestad legítima, faltó el mandamiento escrito de autoridad competente para motivar la prision de Hernandez, cuya omision importa la violacion del artículo 16 de la Carta fundamental.

Quinto: que habiendo pasado de tres dias el aprisionamiento, sin auto motivado de prision, tambien hubo infraccion del artículo 19 de la misma; por tales consideraciones, y con apoyo de la fraccion 1<sup>a</sup> artículo 101

de la propia ley, se decreta; primero: la Justicia de la Union ampara y protege al C. Nabor Hernandez, contra el acto de haber sido reducido á prision de órden verbal del C. Gefe político del Centro, el dia 25 del próximo pasado; segundo: se declara subsistente el auto de suspension inmediata decretado con fecha 28 del mismo mes pasado; tercero: cúmplase con la prevencion del artículo 13 de la ley de amparos, previa las compulsas de estilo.

Lo proveyó el C. Lic. Limbano Correa, Juez de Distrito del Estado, y firma conmigo su escribano que doy fé.—*Limbano Correa.*—Ante mí.—*Gabriel Sosa.*

Es copia que certifico. San Juan Bautista, 13 de Marzo de 1874.—*Gabriel Sosa,* secretario.

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, 20 de Mayo de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Tabasco por el C. Nabor Hernandez, contra la prision á que fué reducido de órden del Gefe político de San Juan Bautista, con violacion de las garantías consignadas en el artículo 16 de la Constitución federal, por no ser dicha autoridad competente para castigar la falta de que se le acusa, y no haberse dictado por escrito el mandamiento que debería fundar y motivar la causa legal del procedimiento.

Considerando: que segun aparece de las constancias de autos, el Gefe político redujo á prision á Hernandez, en castigo de los términos irrespetuosos á su autoridad, de que usó en un escrito solicitando el amparo federal, por despojo de una máquina de coser.

Que la facultad que confieren las leyes á las autoridades para castigar las faltas de respeto y de obediencia, así como que las injurias que se les dirigieren, es una medida de órden encaminada á asegurar el ejercicio

fácil y expedito de las funciones que desempeñan; razon por la cual solamente pueden hacer uso de esa facultad, cuando las faltas fueren cometidas en su presencia y en el acto de estar en el desempeño de sus funciones.

Que por otra parte, el Juez del negocio es el único competente para castigar las injurias y las faltas de respeto que se cometieron en el curso de las actuaciones.

Que las injurias que se dice haber vertido Hernandez contra el Gefe político de San Juan Bautista, no lo fueron en presencia de esta autoridad, y sí en un negocio del que conocía el Juzgado de Distrito; doble motivo por el cual el expresado Gefe político, carecía de facultades para imponer una pena por tales faltas.

Que no parece justificado que se dictara por escrito la órden de prision contra el quejoso, como era de hacerse en cumplimiento del artículo 16 constitucional.

Por estas consideraciones y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución federal, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Tabasco en 12 de Marzo del presente año, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Nabor Hernandez, contra el acto de haber sido reducido á prision de órden verbal del Gefe político del Centro, con violacion de la garantía consignada en el artículo 16 de la Constitución federal de la República.

Devuélvase los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*

rano.—Simon Guzman.—L. Velasquez.—  
M. Zavala.—Enrique Landa, secretario.

Es copia que certifico. México, 8 de  
Agosto de 1874.—Lic. Emilio Pardo,  
oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito  
del Estado de México por Juan Me-  
na, contra los procedimientos del Ge-  
fe político de Toluca, que habiéndolo  
juzgado como salteador, lo condenó á  
la pena de muerte.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el reo Juan Mena ha interpuesto el recurso de amparo, contra la sentencia pronunciada el día 10 de Abril último por el C. Gefe político de este Distrito, condenándolo á la pena capital, conforme á la ley de 3 de Mayo del año anterior de 1873, por efasalto y robó que sufrieron de ocho rebozos de hilaza, en el parage nombrado "Cruz Verde", camino que conduce de esta Capital para Calimaya, los CC. Antonio Torres, Luis Gomez y Joaquin Martinez.

Cuando el Juzgado pidió á la autoridad responsable el informe de ley y con la justificacion que ella exige, no lo produjo con esta calidad, pues se excusó manifestando que la causa la había remitido al Gobierno del Estado para los efectos del art. 59 de la citada ley de 3 de Mayo; á instancia del Ministerio público se solicitó del mismo Gobierno, copia de la causa que se había formado al expresado Mena; y en ella se notan algunas irregularidades en el procedimiento, y no hay constancia alguna de que la autoridad haya proporcionado al acusado los medios de defensa ni prevencion alguna para que produjeran las pruebas que convinieren á sus descargos. Se nota ex-

pecialmente que no existe la justificacion del cuerpo del delito, ni que se le haya convencido de que el hubiese sido el autor del robo.

El quejoso ha hecho valer en el juicio la idea de que el proceso que se le formó y que apareció despues de muchos dias de hallarse preso, siendo quince dias con calidad de separacion, ha sido suplantado aunque no se justificó de un modo claro y evidente; sin embargo llama mucho la atencion las diligencias que á este respecto se practicaron á solicitud del quejoso.

En efecto, por las declaraciones de Tereso Garcia y Mariano Mendieta, fojas 27 y 28, boqueteros de la cárcel, aparece que Juan Mena entró á la prision un día viernes que corresponde por fecha al 30 de Enero último teniéndolo en un separo por quince dias, sin que lo sacaran fuera de la prision.

El Alcaide de la cárcel, fojas 24, expuso en declaracion en forma que se le recibió, que Mena había entrado á la prision el día 31 del mismo Enero, fecha que es conforme con una nota que se halla al margen del libro de entradas de presos, de cuya nota hay constancias en la foja 25 vuelta.

La Jefatura política comenzó á formar el proceso de Mena el día 30 de Enero ya citado, fecha que conviene con la declaracion de los boqueteros, pero la ena no es conforme con la declaracion del Alcaide ni con la nota del libro de la alcaidia; y el juicio que sobre el particular puede formar el que habla de este hecho, es que ni el Alcaide ni el libro dicen una verdad, y en el caso los boqueteros son de mejor condicion, porque en ellos se debe de presumir mas imparcialidad que la que puede tener el Alcaide, que es empleado subordinado á la autoridad política. Por otra parte, no se puede explicar que haya hecho aquella autoridad con el reo Mena la noche y día del 30 de Enero, no debiendo suponerse que lo haya dado libre, despues de que en ese mismo dia consta en el testimonio de la causa,